

Para que surta los efectos de notificación, de conformidad con cuanto establece el artículo 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se expide el presente en Melilla a veinticinco de marzo de mil novecientos noventa y nueve

La Jefa de Sección.
Concepción Lascano Sorroche.

INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE MELILLA

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

1032.- No habiéndosele podido notificar directamente a la empresa M^a CARMEN MARTÍNEZ FERNÁNDEZ, CIF o DNI 45.282.653 la Resolución dictada por el Director Provincial de Trabajo, Seguridad Social y Asuntos Sociales con fecha 05/11/98, en primera instancia, en expediente dimante de Acta de Infracción, ref. AIS-185/98, levantada a la empresa referida con fecha 10/06/98, por la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, Resolución en la que se hace constar:

RESULTANDO: Que en el Acta de Infracción referenciada se hacen constar los hechos y Derecho aplicado que por economía procedimental se dar por transcritos y a los que nos remitimos.

RESULTANDO: Que se propone la imposición de la sanción por un importe total de CINCUENTA MIL UNA PESETAS (50.001 PTS).

RESULTANDO: Que a la citada empresa le fue notificada dicha Acta, haciéndole presente su derecho a formular contra ella las alegaciones que estimase pertinentes en defensa de su derecho ante la Unidad Administrativa de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

RESULTANDO: Que en uso de ese derecho la empresa presentó escrito de descargos en el que se hace constar lo que el alegante entiende conducente a la mejor defensa de su derecho.

RESULTANDO: Que en la tramitación de este expediente se han observado las prescripciones reglamentarias de aplicación.

RESULTANDO: Que por parte del órgano instructor se ha emitido la preceptiva propuesta de resolución que obra en el expediente.

CONSIDERANDO: Que las infracciones reseñadas están adecuadamente tipificadas y se ha graduado la propuesta de sanción y efectuada la cuantificación dentro de los límites legales, de conformidad con los arts. 36 y 37 de la Ley 8/1988, de 7 de abril, sobre infracciones y sanciones en el orden social (BOE 15-4-88).